

Gobierno presenta hoja de ruta para agilizar inversiones y modernizar la minería en el país

Biministro Daniel Mas presentó lineamientos ante la Cámara para combatir la “permisología” y fortalecer a Enami y Codelco. Mientras la academia advierte sobre la reducción de permisos en tierras raras, desde la Asociación de Industriales de Iquique exigen reglas claras y beneficios específicos para las regiones del norte.



 María José Vásquez

USD 17 mil

en proyectos se han ingresado a evaluación ambiental desde marzo de este año, según el gobierno.

Chile se mantiene como un actor principal y relevante en la producción global de cobre y litio, una posición que el Gobierno busca fortalecer mediante una nueva agenda legislativa y administrativa. Así lo detalló el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, quien presentó ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados los lineamientos para potenciar la industria en todas sus escalas.

La autoridad resaltó que existe un “renovado ambiente proinversión” que ya suma más de 17 mil millones de dólares en proyectos ingresados a evaluación ambiental desde marzo, gracias a las señales dadas por este Gobierno y que han generado una expectativa positiva que ha impulsado la confianza del sector.

A juicio del secretario de Estado, los problemas que hoy frenan a la minería son la falta de certeza jurídica, la excesiva “permisología” y la escasez de incentivos para la exploración. Frente a este último punto señaló que se está estudiando un paquete integral de medidas para su fomento, que contempla medidas tributarias y re-

gulatorias que buscan darle fuerza estructural a los proyectos de exploración.

ENAMI, CODELCO Y ROYALTY

La modernización de la institucionalidad pública minera también fue foco de la presentación ante la comisión legislativa, resaltando el rol de la Empresa Nacional de Minería en territorios mineros cuyo desafío es robustecer las herramientas de gestión para hacerla competitiva y poder fomentar incluso a mayor escala la pequeña y mediana minería. “En ENAMI, queremos avanzar hacia un gobierno corporativo más profesional y una gestión más eficiente”, señaló.

Respecto a Codelco, el secretario de Estado subrayó la voluntad de “realizar una revisión de la situación financiera, la gestión y otras situaciones que requieren medidas concretas para su mejor funcionamiento”, en

el marco de la próxima junta de accionistas que se realizará durante este mes.

En relación al royalty minero, el biministro reconoció que los recursos otorgados a las regiones tienen un impacto directo al bienestar de la vida de un gran número de comunas. “Creemos fundamental avanzar en mayor transparencia en el uso del royalty, procurando la visibilización del uso de fondos provenientes del royalty en toda obra pública, inversión social o programa financiado total o parcialmente con dichos recursos”, comentó.

PEQUEÑA MINERÍA Y MIRADA REGIONAL

Sobre el fortalecimiento y fomento de la pequeña minería, el biministro Mas explicó estar impulsando una reforma al amparo minero para ordenar el régimen de las patentes mineras, evitar la especu-

lación y promover la explotación efectiva de los minerales. “Existe una serie de problemáticas que afectan a la pequeña minería en el actual sistema de patentes, generando una serie de desincentivos por los elementos engorrosos del sistema”, señaló.

Desde la Asociación de Industriales de Iquique (AII) señalaron que la intervención del biministro llega en un momento clave para el país, donde Chile no solo enfrenta una desaceleración en la inversión minera, sino también una creciente sensación de incertidumbre que está impactando directamente en la toma de decisiones de las empresas y, por consecuencia, en la generación de empleo y en el desarrollo de las regiones.

“Valoramos que el Ejecutivo esté planteando incentivos para dinamizar la inversión. Sin embargo, la señal debe ser más clara y contundente”, señaló Marcos Gómez, gerente general de AII, quien agregó que la industria no solo necesita anuncios, necesita certezas, reglas estables, tiempos acotados y un marco que entregue confianza para invertir en el largo plazo. “En minería, las decisiones no se toman en meses, se proyectan a décadas”, enfatizó.

(viene de la página anterior)

Frente a la situación regional, el gerente general de la AII, señaló que hay un punto que no puede seguir quedando fuera del debate, refiriéndose a la realidad apremiante que viven las regiones extremas. "Tarapacá, como muchas zonas del norte, enfrenta condiciones más exigentes que el resto del país. Mayores costos logísticos, brechas de infraestructura productiva y facilitante, además de dificultades para atraer talento, son parte de una realidad que no puede seguir tratándose bajo un criterio uniforme. Si queremos desarrollo territorial real, debemos avanzar en condiciones preferentes —tributarias y/o de contratación— que reconozcan estas diferencias", comentó.

“Valoramos que el Ejecutivo esté planteando incentivos para dinamizar la inversión. Sin embargo, la señal debe ser más clara y contundente”.

Marcos Gómez,
 gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

El biministro Más agregó que una de las metas a conseguir es establecer un estatuto especial para incentivar y agilizar el desarrollo de proyectos o inversiones estratégicas para el país, como las tierras raras, simplificando el otorgamiento de permisos para su explotación y comercialización para exportar en este caso su producto final.

Al respecto, Juan Pablo Vargas, director del departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago, señaló que frente a estas medidas, Chile está muy avanzado en eso y concuerda en la necesidad de agilizar permisos. "Somos un país minero, donde la inversión entra sin problemas. En el caso de las tierras raras tenemos que recordar que tenemos un solo proyecto que ha estado aparentemente detenido por bastante tiempo, entonces no veo la necesidad de hacer esto; si de agilizar el otorgamiento de permisos y de la obtención de ellos, pero no de reducirlos, porque esto es una salvaguarda que tiene el país para mantener una sostenibilidad en nuestra actividad", comentó.

FISCALIZACIÓN DEL ROYALTY

Desde el parlamento, el diputado por la Región de Ta-



rapacá, Álvaro Jofré destacó que el Ministro de Minería ya haya presentado una hoja de ruta con ejes que "son fundamentales para el desarrollo del sector, como la inversión, la exploración, la certeza jurídica, el fortalecimiento institucional y la transparencia en el uso del royalty. Esa es una señal positiva, especialmente para regiones como Tarapacá, donde la minería tiene un peso decisivo en la economía, el empleo y la actividad cotidiana de nuestras comunas".

Para Jofré, sin embargo, lo más importante ahora es que esos lineamientos se conviertan en decisiones concretas y en resultados visibles para las regiones. "En particular, el royalty minero debe dejar de ser percibido como una cifra abstracta y transformarse en una herramienta efectiva de desarrollo local. La ciudadanía tiene derecho a saber con claridad dónde van esos recursos, cómo se invierten y qué beneficios concretos están generando. Cuando hablamos de royalty, hablamos de infraestructura, de apoyo a proveedores y pymes, de dinamismo económico, de obras que mejoren la vida de las perso-

“El royalty minero debe dejar de ser percibido como una cifra abstracta y transformarse en una herramienta efectiva de desarrollo local”.

Álvaro Jofré,
 diputado por Tarapacá

nas y de oportunidades reales para las comunidades que han convivido históricamente con la actividad minera. Tarapacá merece ver reflejado en su desarrollo una parte concreta de la riqueza que ayuda a

generar para el país”.

Por eso, junto con valorar el planteamiento del ministro y el tono de los compromisos anunciados, "creemos que también es necesario perfeccionar los mecanismos de trazabilidad, control y rendición de cuentas de estos recursos, de manera que exista mayor claridad sobre su destino y sobre el impacto que están teniendo en cada comuna. Desde el trabajo legislativo, mi compromiso va a estar en fortalecer las normas para que municipios y gobiernos regionales deban informar con mayor detalle el uso de estos aportes, en impulsar reportes periódicos que permitan seguimiento y transparencia efectiva, y en promover criterios más claros para orientar una parte importante de estos fondos hacia inversión en infraestructura y desarrollo regional, priorizando obras y proyectos que generen beneficios visibles para la comunidad. Ese debe ser el foco de esta discusión, que el royalty no solo exista, sino que se traduzca de manera concreta, transparente y oportuna en mejor calidad de vida para las regiones productoras".